

Política de desarrollo agrario

(Documento preparado por OCEPLAN, donde se fijan las grandes líneas de orientación del Gobierno Popular frente a la agricultura).

Introducción

Asiste Chile a un período decisivo de su vida como Nación. Mientras el mundo se transforma aceleradamente —y en todos los países se buscan nuevas rutas para promover el progreso científico y técnico e impulsar el desarrollo económico y social— nuestro país está marcando el paso: está estancado.

La Nación ha sido detenida en su marcha. Los signos del retroceso, el agravamiento de los problemas económicos y financieros y el empobrecimiento de las clases populares, traducen la decadencia. Estamos presenciando el fracaso de un sistema. Las estadísticas internacionales indican que el crecimiento económico de Chile es, en la actualidad, uno de los más bajos de América Latina. En ciertas épocas dicho crecimiento ha sido, incluso, inferior al de la población.

El estancamiento de dos sectores básicos —la agricultura y el comercio exterior— han conformado el cuadro general de lento crecimiento de la economía chilena. En estos dos sectores se encuentran los principales escollos para el desarrollo y progreso del país.

Hace poco tiempo, el Dr. Salvador Allende contestando unas alusiones del senador Eduardo Frei, dio a conocer en forma clara el pensamiento del Movimiento Popular respecto a la situación del cobre, nuestro principal producto de exportación. Expresó en dicha oportunidad que concebimos “el problema del cobre como uno de los aspectos de una nueva gran estrategia para el desarrollo económico y que negar la nacionalización del cobre significaba de hecho negar la posibilidad de realizar los profundos cambios estructurales que el país necesita”.

Pedimos a la opinión pública del país que analice con atención nuestros planteamientos, porque la reacción y su nueva cara —la democracia cristiana— han desatado una millonaria campaña publicitaria de calumnias, destinadas a desvirtuar los puntos de vista del Movimiento Popular.

Nuestra misión, por el contrario, consiste en clarificar las cosas, hacer luz sobre los problemas básicos de Chile y en todo momento decir la verdad. Ni cábalas políticas, ni cábalas económicas, y si hay que decirlo lo repetimos una vez más: en el Movimiento Popular no se anda con “santos tapados”.

En el problema agrario la reacción ha sido especialmente hábil para frenar y desvirtuar los cambios que ya no son posibles de eludir. En efecto, expresiones como “cambios estructurales”, “reforma agraria”, “redistribución del ingreso”, etc. han sido incorporadas al vocabulario propagandístico de la reacción. Ya se ha hecho imposible atacar al Movimiento Popular denunciando sus planes programáticos como demagógicos e irrealizables y se ha tornado necesario recurrir a nuevas fórmulas.

Un ejemplo puede ilustrar lo anterior. La “reforma agraria” que está llevando a cabo la presente administración, demoraría mucho más de 100 años para darle tierra a todos los que la necesitan y representa un espléndido negocio para los latifundistas ya que éstos han recibido, en promedio, cinco veces el valor del avalúo fiscal por los fundos que le han vendido al Gobierno.

También se está realizando una campaña de terror para amedrentar a los agricultores y campesinos. Con decidida mala fe se está asegurando que el Gobierno Popular expro-

piará no sólo todas las tierras, sino también las casas, las industrias y el comercio.

Podemos asegurar, con entera responsabilidad, que nada deben temer los pequeños y medianos propietarios. No sólo se respetarán sus derechos sino que en el Gobierno Popular gozarán de diversas facilidades que no tienen en la actualidad, como créditos suficientes, precios justos, asistencia técnica, abastecimiento adecuado de semillas, abonos y maquinarias, etc.

En cambio, el Gobierno Popular será inflexible en sus propósitos de liquidar la penetración foránea, el latifundio improductivo, los monopolios industriales y comerciales y la alta banca, ya que ello permitirá movilizar el "excedente económico potencial" para aumentar substancialmente el progreso del país y el nivel de vida de la gran mayoría de los chilenos.

El cuadro agrícola

Como sucede en los países atrasados, una parte importante de la población chilena está radicada en las zonas rurales. Alrededor de 3 millones de personas viven en el campo y de ellas, unas 700 mil participan en las actividades agrícolas, lo que representa el 30% de la población activa total del país. Pero, no obstante el gran porcentaje de chilenos vinculados a la agricultura, el esfuerzo productivo de este sector sólo genera el 10% del ingreso nacional y contribuye con el 6% del valor de las exportaciones. La productividad media de la agricultura es muy baja y llega a menos de la mitad de la de toda la economía.

El desarrollo de esta actividad básica ha sido sumamente lento. En los últimos 20 años (1943-1963), la producción agropecuaria creció sólo a una tasa promedio anual de 1,7%, en tanto que la población aumentó en el mismo período a un 2,5% al año. Este crecimiento desigual es un síntoma revelador de la crisis profunda que afecta a nuestra agricultura.

Ello significa que cada año el pueblo dispone de menor cantidad de alimentos.

Ello representa, por otra parte, que la agricultura no está cumpliendo con otra función vital para el desarrollo económico general, cual es: entregar las materias primas esenciales para el proceso de industrialización.

La consecuencia inmediata de este cuadro deplorable es mantener a una población de tres millones de campesinos con salarios extremadamente bajos, al margen de los bene-

ficios de la civilización y del consumo de los productos manufacturados.

Y como secuela inevitable de estos males se constata la persistencia del estigma del analfabetismo, ignorancia y miseria que las clases dominantes han mantenido sobre tantas generaciones de hombres que han labrado los campos. Mientras el analfabetismo llega a un 18% en el país, éste sube a un 48% en el área rural, si incluimos a aquellas que han olvidado los conocimientos elementales que aprendieron en su infancia.

El problema de la alimentación

La manifiesta incapacidad de la actual agricultura chilena para crecer a un ritmo mayor que el que sigue el crecimiento de la población, ha significado un progresivo empeoramiento de la situación alimenticia de la gran mayoría de los chilenos, el que se ha visto agudizado dramáticamente en el curso de los últimos años.

Gran parte de los trabajadores ya no conocen ni consumen alimentos que son indispensables para una dieta adecuada. La manteca, la carne, el queso, la fruta y muchas verduras están desde hace mucho tiempo ausentes de las mesas de los hogares humildes. A esta lista se han agregado ahora las papas, el aceite, el arroz y hasta el pan ha debido ser reducido. La penosa realidad es que hay hambre en Chile desde hace muchísimos años.

Diversos organismos nacionales e internacionales han realizado estudios que han puesto en evidencia el grave problema alimenticio y el estado de progresiva desnutrición que aqueja a nuestro pueblo, especialmente a la niñez.

La solución que se ha pretendido dar a este problema del subdesarrollo no es menos grave, ya que ha consistido en gastar nuestras divisas en alimentar la población. Si hasta ahora el procedimiento ha sido desastroso, calculen Uds. la repercusión que tendría este sistema sobre la Balanza de Pagos si seguimos con los mismos ritmos de crecimiento y una población de 10 o 15 millones de habitantes.

A esta subalimentación se debe la alta mortalidad infantil y el desarrollo físico inadecuado de los hijos de los obreros y campesinos.

Para comprender mejor esta situación baste señalar que a comienzos de siglo nuestra población era sólo de 3 millones de personas; en 1950 ella se había duplicado; en la actualidad es de 8,3 millones; en 1970 será de unos

diez millones y en el año 2000 subirá de los 20 millones.

Estas cifras nos muestran la imperiosa necesidad de producir, por lo menos en la misma proporción, los alimentos en nuestro territorio. Si no lo hacemos, las consecuencias serán graves: hambre, o nuestra población tendrá que emigrar en busca de sustento a otros países, como ya ha estado ocurriendo en los últimos 15 años.

Querría decir, que para alimentar a los chilenos habría que reducir las importaciones de materias primas, maquinarias, repuestos, medicinas, etc., y que el esfuerzo industrial hecho por el país y planeado en el Gobierno Popular de don Pedro Aguirre Cerda se habría malogrado, ante la imprevisión sustentada respecto a los problemas de la producción agraria.

En suma si no atacamos el mal endémico del bajo crecimiento promedio de la tasa anual de la producción agropecuaria nacional, nuestro porvenir como raza y nación es: morirnos de hambre, o atacados por las enfermedades por falta de defensas; o emigrar, o proseguir en la inflación más desatada, pero siempre matar al pueblo de hambre y sufrir la escasez del material importado indispensable.

La justeza de nuestras afirmaciones se puede ver si se consideran los siguientes datos: en el quinquenio 1950-1954 debió importar un promedio de 90 millones de dólares al año en alimentos; en el quinquenio siguiente este promedio subió a 100 millones y en el periodo 1960-1963, a 120 millones.

Si se mantienen las actuales tendencias, en 1970 el país deberá importar alrededor de 200 millones de dólares.

La mayor parte de las importaciones de alimentos realizada en los últimos 10 años está constituida por artículos que podríamos producir en el país.

Esta creciente sangría de divisas, originada por la insuficiente producción agropecuaria agrava aún más el crónico desequilibrio de nuestra situación de pagos con el exterior y resta valiosos recursos a la capitalización del país.

No haber solucionado el problema agrario es, pues, el más grave cargo que se puede imputar a los Gobiernos que se han sucedido en el poder, con el agravante que aquí no pueden aducir el complejo de inferioridad que sufren cuando se trata de tocar los intereses del imperialismo. El caso de la agricultura chilena no es sino la demostración palmaria

de la incapacidad de la clase gobernante para resolver los problemas de un mundo moderno; incapacidad fruto de su egoísmo, su conformismo e inercia para aceptar las situaciones producidas y su carencia de patriotismo para defender a Chile de la rapacidad de la oligarquía y de los capitales extranjeros.

Las causas del estancamiento

—¿Por qué se produce esta situación de crisis alimenticia y de miseria campesina?

—¿Acaso el campesino de nuestra tierra está condenado eternamente a vivir al margen de la civilización?

—¿Acaso Chile es un país excepcionalmente inadaptado para los cultivos agrícolas y a ello se debe el estancamiento de la producción agropecuaria?

NO; definitivamente no. Según estudios de las Naciones Unidas, Chile dispone de un número de hectáreas arables por habitante casi tres veces superior, en promedio, a Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, Dinamarca, India, Japón y muchos otros países.

Chile tiene tierras similares y condiciones naturales iguales en la zona Central a las del Estado de California y en la zona Sur, hasta Puerto Montt, iguales a las de Nueva Zelanda. Si en nuestro país se aplicaran los modernos métodos y técnicas que se ponen en práctica en los casos anteriormente señalados, Chile podría llegar a producir alimentos para una población superior a los 5 millones de personas.

Por otra parte, la laboriosidad y la eficiencia del campesino chileno, ha recibido el reconocimiento de todos los técnicos extranjeros que han visitado nuestro país.

El atraso agrícola se debe, en consecuencia, a un mal aprovechamiento de los recursos naturales y humanos existentes. A su vez, este mal aprovechamiento de los recursos se basa en la existencia de una estructura de propiedad de la tierra injusta y anticuada y en la carencia de una política económica definida destinada a fomentar esta actividad.

El latifundio: el gran culpable

El territorio agrícola chileno se extiende a lo largo de sus 4.200 kilómetros; tiene desde estepas semiáridas hasta tierras regadas de gran calidad, pasando por zonas de cultivo de secano de variadas condiciones, y grandes extensiones de bosques naturales y artificiales. Las regiones más ricas en recursos naturales para la explotación agrícola se encuen-

tran situadas entre las provincias de Santiago y Chiloé, sin dejar de considerar la importancia que tienen el Norte Chico y la Zona Austral en lo que se refiere a producción frutícola y ganadera respectivamente.

El latifundio es incapaz de utilizar sus recursos ni siquiera en la forma que lo hacen actualmente los pequeños y medianos propietarios. Su productividad es muy baja y por lo tanto, está frenando la expansión de la producción agrícola. El latifundio es el gran culpable de nuestro atraso agrícola.

Por ejemplo, en las 10 provincias comprendidas entre Santiago y Bio-Bio sólo cultiva el 26% de la tierra agrícola que posee, esto es apenas la cuarta parte. En cambio los pequeños y medianos productores cultivan el 81% de ella.

Los pequeños y medianos agricultores con una superficie equivalente a poco más de la mitad de la que tiene el latifundio, producen el 57% del trigo de la región, el 64% del maíz, el 66% de los porotos, el 77% de las lentejas, el 80% de las frutas, el 62% de la leche, y el 66% de las papas.

En la zona comprendida entre Malleco y Chiloé y que agrupa a 7 provincias, la situación es aún más grave. Aquí el riego deja de tener importancia. En esta región se concentra la mayor producción triguera y ganadera y es nuevamente la pequeña y mediana propiedad la que produce el 87% del trigo, el 96% de las papas, el 82% de la avena y el 90% de la leche de toda la región.

Esta forma de explotación latifundaria de la tierra representa un aprovechamiento marcadamente ineficiente de los recursos naturales de la agricultura; significa la destrucción de gran parte de estos recursos como lo demuestra la erosión absoluta de 4 millones de hectáreas agrícolas, más 16 millones que están en proceso de desaparición por los efectos de la erosión; asimismo, implica la mantención de una gran población de campesinos con salarios extremadamente bajos, los que reciben sólo el 28% del total de los ingresos de la agricultura.

En consecuencia, el latifundio constituye el primer y principal obstáculo que hay que salvar para que luego sea posible introducir las más modernas técnicas y crear los mecanismos de estímulo necesarios para lograr un acelerado desarrollo de la producción agropecuaria.

Los que quieren invertir la dirección de este proceso, creando primero los mecanismos de estímulo, sólo persiguen la mantención del

latifundio, del "statu quo" y no el progreso de la agricultura chilena.

La carencia de una política definida

Ha faltado hasta ahora la aplicación de una política económica tendiente a estimular la producción agropecuaria. Muchas veces se han adoptado determinadas medidas que entran en contradicción con otras que disponen exactamente lo contrario.

El caso más destacado de lo que acabamos de señalar se aprecia en la ganadería, sector que no se ha podido desarrollar adecuadamente debido a las políticas ganaderas contradictorias aplicadas por la mayoría de los gobiernos que se han sucedido en el poder en los últimos cincuenta años. El resultado está a la vista. Debemos importar unos 20 millones de dólares al año en carne.

La política crediticia ha sido mal aplicada y los créditos se han entregado a los grandes propietarios, los que generalmente los han empleado en actividades diferentes a la agricultura, como ser la adquisición de edificios de lujo en las ciudades, actividades especulativas, viajes al exterior o en consumos suntuarios. Los medianos y pequeños productores han recibido una escasa parte del crédito, generalmente a plazos inadecuados y a un alto interés.

La política de precios para los productores agropecuarios ha sido torpe. Por un lado se han implantado "los precios políticos" y por otro, se ha permitido la proliferación y consolidación de los grandes intermediarios. Parte importante del precio queda en manos de éstos con perjuicio de los productores y del consumidor. Se estima que sólo la tercera parte queda en manos del productor. La fijación de precios se ha hecho muchas veces en forma arbitraria y lo que es más grave a destiempo.

Las políticas aplicadas en relación al abastecimiento de abonos, implementos y maquinarias también han sido anárquicas y ello ha impedido la tecnificación en el campo.

Ha faltado una política racional de comercio exterior y de comercialización interna de los productos agropecuarios. No han sido superadas las dificultades de transporte y la asistencia técnica ha sido inadecuada e insuficiente. Por último, se ha creado una serie de organismos públicos y privados que han abordado aspectos parciales del problema agrario, creándose así una dispersión de esfuerzos y recursos. Todo esto ha llevado a

la actividad agropecuaria al estado de estancamiento y retroceso que hoy presenta.

La política del Gobierno Popular

El Gobierno Popular recibirá una agricultura en crisis, como ningún Gobierno antes debió afrontar. Es parte de la pesada herencia que nos deja la reacción.

A pesar de ello, tenemos amplia fe y confianza en el porvenir de la agricultura chilena, porque conocemos sus problemas y porque tenemos la inquebrantable decisión de movilizar los excedentes económicos potenciales del campo. Haremos que la agricultura ocupe el papel dinámico de promotor primario del desarrollo económico que le corresponde. Para ello pondremos en marcha un ambicioso Plan de Desarrollo Agropecuario cuyos aspectos básicos paso ahora a señalar de la manera más sintética posible.

El Gobierno Popular liquidará el latifundio improductivo y con ello creará las condiciones para alcanzar los objetivos básicos del Plan, mejorar las condiciones de vida de los campesinos y elevar la producción agropecuaria. Para ello encararemos resueltamente los cambios estructurales e institucionales que se requieren. Obtendremos así diversas aspiraciones largamente sentidas por la población chilena: un mejor nivel de vida para las grandes masas campesinas y para los medianos y pequeños productores.

A través de un abastecimiento y distribución adecuados de los productos agrícolas se logrará un sustancial mejoramiento del nivel alimenticio para preservar y defender el capital más precioso que tiene el país: su población.

Nuestra Reforma Agraria

Ya hemos dicho cómo deliberadamente la reacción trata de desfigurar el sentido real de lo que debe ser una reforma agraria. El Gobierno Popular realizará una auténtica reforma agraria para transformar el régimen de propiedad de la tierra y de las formas de trabajo y explotación agropecuaria; nuestra reforma agraria no será una solución aislada sino que formará parte de un conjunto planificado de reformas estructurales que contemplan la eliminación del latifundio improductivo; la supresión del monopolio comercial e industrial; la liquidación de la penetración foránea y la estatización de la alta banca con el objeto de poner de nuevo a toda la econo-

mía chilena en movimiento y sacarla de su actual postración.

Nuestra reforma agraria, planeada socialmente, resulta indispensable para satisfacer las legítimas aspiraciones de los trabajadores de la ciudad y del campo y para asegurar la condición previa más importante de nuestro desarrollo económico y social; que consiste, precisamente, en la liberación de la energía y potencialidad creadoras de las masas rurales, las que han sido contenidas y oprimidas por siglos.

El sentido, los mecanismos, el destino de las tierras que se expropiarán y los plazos de realización de nuestra reforma agraria, difieren sustancialmente de los planteamientos de las otras candidaturas.

No basta con enunciar los propósitos de realizar la reforma agraria ni de obtener un alza en la producción. Es necesario señalar claramente cómo, cuándo y con qué se llevarán a cabo dichos propósitos.

Las tierras que se expropiarán

En Chile existen alrededor de 151 mil explotaciones agrícolas. La propaganda reaccionaria ha difundido la mentira que el Gobierno Popular las expropiará a todas ellas. La verdad es muy distinta. La candidatura popular, después de un estudio sistemático realizado por sus técnicos, ha establecido ciertas formas que caracterizan al latifundio en cada región de Chile. Se considera por un lado la superficie agrícola total y por otro la superficie regada. Así, por ejemplo, en las provincias de Coquimbo a Bio-Bio serán expropiables las propiedades con más de 1.000 Hás.; desde Bio-Bio a Chiloé serán expropiadas aquellas con más de 2.000 Hás. de superficie, y en Aysén y Magallanes, las que cuenten con más de 3.000 Hás. La consideración de la superficie regada varía según se trata de las zonas de Coquimbo a Valparaíso, Santiago a Colchagua y Curicó a Bio-Bio siendo un promedio de 150 Hás.

Esta clasificación se aproxima a las exigencias que determina la diversidad de las condiciones naturales en cada región de Chile. No representa la realidad de cada caso particular, pero desmiente en forma categórica y responsable la propaganda mal intencionada de la derecha.

Ello representa, en total, no más de 2 mil a 3 mil explotaciones de las 151.000 que existen en el país, menos del 2% del total de propiedades, pero incluye en ese pequeño número el 66% de la superficie agrícola del país,

los 2/3 del total, mal explotada o no trabajada, la que el Gobierno Popular hará pasar a manos de los campesinos. El resto, alrededor de 148.000 propietarios, no sólo no deben temer una acción contraria a ellos en el Gobierno Popular sino que serán ampliamente protegidos y beneficiados por aquél.

Además de los límites máximos fijados para cada región del país, podrán ser expropiadas también, aunque no hayan sido calificadas de latifundio, aquellas propiedades agrícolas que sean necesarias para el adecuado abastecimiento alimenticio de la población de las principales ciudades alrededor de las cuales se crearán los "cinturones agrícolas".

El Gobierno Popular expropiará el total de los latifundios, pero dejará a sus propietarios una superficie suficiente para que éstos la trabajen de acuerdo a las normas generales. Podrán quedarse con sus mansiones y sus bienes suntuarios. Nosotros necesitamos la tierra y los implementos de trabajo para hacerla producir en bien de todos los chilenos.

Con la liquidación del latifundio habremos realizado el primero y más importante cambio estructural en el sector agrario: tendremos un nuevo sistema de tenencia de la tierra.

El segundo cambio de profundidad se realizará en el régimen y la distribución de las aguas. Se creará el estanco de las aguas, el que concederá el usufructo de ellas a través de organismos adecuados. En esta forma el agua se utilizará de acuerdo a los requerimientos de la producción agrícola del país y no, como sucede en la actualidad, en base a la capacidad de compra de derechos, que tienen los propietarios. La justicia de esta medida no puede ser discutida. En la mayoría de los países adelantados está racionalizado y controlado el uso de las aguas. Esta medida tendrá efectos extraordinariamente positivos sobre el futuro desarrollo de la producción agropecuaria.

Se pagarán las expropiaciones

El Gobierno Popular pagará una compensación por la tierra expropiada a los latifundistas, pero el precio se ajustará al avalúo de la propiedad. De acuerdo a ese avalúo se han cancelado por largo tiempo los precarios impuestos que se han obtenido del latifundio, de suerte que la diferencia que existe entre el avalúo fiscal y el valor comercial, apenas cubre las cantidades eludidas a la tributación durante decenios.

El pago de la indemnización a los latifundios se hará en bonos de la Reforma Agraria

a 30 años plazo y con un interés del 4% anual, el que no puede ser considerado exiguo ya que durante el Gobierno Popular no habrá desvalorización de la moneda.

Quiénes recibirán las tierras

La tierra expropiada será entregada básicamente a los campesinos que la trabajan; vale decir: a los inquilinos, a los medieros, a los obreros agrícolas, a los pequeños y medianos arrendatarios y a los propietarios de minifundios. Asimismo, existirá especial preocupación para entregar a los indígenas y a los comuneros del Norte Chico la tierra de los latifundios expropiados en sus regiones con el objeto de devolverles sus legítimas tierras que les fueron usurpadas por los terratenientes.

En general, se dará preferencia a los campesinos que vivan en las mismas tierras expropiadas o colindantes.

Nuestra reforma agraria establecerá el "patrimonio campesino" que será la unidad mínima de explotación agrícola cuya superficie, como es obvio, será diferente de acuerdo a las particulares condiciones de los suelos en las diferentes regiones del país.

Los campesinos a quienes entreguen las tierras expropiadas, no obstante ser dueños de su explotación, recibirán el estímulo del Estado para organizarse en cooperativas de producción, de crédito, de comercialización, de mecanización agrícola, etc.

El Gobierno Popular entregará también tierras a los campesinos para que las trabajen en forma colectiva, bajo la dirección del organismo público encargado de la reforma agraria.

Por último el Estado se reservará determinadas tierras para explotárlas directamente con el fin de organizar granjas modelos y campos experimentales, intensificar cultivos especiales o asegurar el abastecimiento de alimentos esenciales y materias primas necesarias para la industria nacional.

Estos cambios que se harán en la estructura de la propiedad permitirán la coexistencia de diferentes modalidades de explotación: la propiedad privada o individual de la tierra y junto a ella se impulsará la explotación colectiva y la explotación directa del Estado. Ella acelerará la aplicación de las más modernas técnicas de trabajo descubiertas en las estaciones experimentales chilenas o en otras partes del mundo y se podrá llevar a cabo una política definida y vigorosa de estímulo para incrementar la producción agropecuaria.

Algunas medidas de política agraria

Para asegurar una permanente expansión de las actividades agrícolas se requiere que, tanto el nuevo régimen de tenencia de la tierra como el uso de la misma, tengan en vista la necesidad de conservar los recursos naturales —suelo, aguas, bosques—, merced a una racional explotación agrícola. Esto significa que la cabida de las unidades productivas económicas y el sistema de cultivo y su rotación deben proponerse cautelando la conservación de dichos recursos naturales, defender a la tierra de la erosión y demás agentes que deterioran su aptitud productiva.

La fijación de cabidas mínimas para las unidades en las zonas particularmente erosionables, la prohibición de cultivar las tierras de pendientes avanzadas, la obligación de practicar en ciertos casos labores de contorno y someterse a determinados sistemas de rotación de tierras o de cultivos, son algunas de las principales medidas que se aplicarán, con el objeto de procurar la finalidad anteriormente señalada. El régimen de protección y fomento de la riqueza forestal del país deberá entregar en manos del Estado los bosques naturales y artificiales de extensión considerable, para establecer unidades colectivas de explotación o para regular estrictamente su producción mediante concesiones particulares, en casos calificados.

En suma, la política de conservación de nuestros recursos naturales, de protección y fomento forestal, detención del avance de las dunas, etc., será una preocupación preferente del Estado, a fin de asegurar para el futuro el mantenimiento y la expansión del potencial agrícola nacional.

La política de precios y comercialización

La falta de poder adquisitivo de las grandes masas ha creado una demanda "insatisfecha" de alimentos y algunos gobiernos han recurrido a paliar esta situación con el desprestigiado recurso de la fijación de "precios políticos" para los alimentos. Como consecuencia de ello los agricultores medianos y pequeños, que son, como hemos visto, los que aportan la cuota mayor de producción, han visto reducidos sus ingresos casi en la misma proporción que la población consumidora, al carecer de incentivos para producir más.

Así como el Movimiento Popular rechaza categóricamente y definitivamente la disminución del poder adquisitivo de sueldos y salarios, así tampoco acepta que se reduzcan los in-

gresos reales de los medianos y pequeños productores.

—¿Quiénes han sido los que han profitado de esta injusta situación?

Han sido los grandes intermediarios los que han aumentado sus márgenes de utilidad en perjuicio de los consumidores y de los pequeños y medianos productores. En muchos casos sólo la tercera o cuarta parte del precio final queda en manos de los agricultores.

De lo anterior fluye una conclusión inobjetable: hay que racionalizar el proceso de mercado a fin de reducir considerablemente el margen entre los precios al consumidor y al productor, para lo cual será necesario eliminar la influencia de los monopolios y grandes intermediarios mayoristas.

En esta forma no será necesario alzar los precios relativos de los alimentos. Si a ello se agrega el efecto de la política de redistribución que hará el Gobierno Popular en favor de los sectores más débiles de la población, la demanda por alimentos experimentará una expansión significativa y será un factor dinámico para el desarrollo agropecuario.

El Gobierno Popular creará a través de las Empresas de Comercio Agrícola o a través de otros organismos un gran poder comprador de productos agropecuarios esenciales. Ello permitirá fijar precios justos y con la suficiente anticipación para que los agricultores tengan una clara visión de sus posibles resultados económicos, antes de efectuar sus siembras.

Al igual que eliminaremos a los grandes monopolios intermediarios que operan en la distribución de los alimentos, haremos lo mismo con los grandes consorcios exportadores de productos agropecuarios que no sólo contribuyen a encarecer los precios de nuestros productos en el exterior sino que también cometen la irregularidad de dejar una cuota importante de divisas fuera del país.

El Gobierno Popular creará los organismos necesarios para estimular la exportación de todos los productos nacionales, de tal manera que pueda contribuir, al igual que las naciones más avanzadas del mundo, a standardizar la producción exportable agropecuaria, construyendo frigoríficos, plantas embaladoras, y conserveras; teniendo una flota de barcos que transporte la producción y adoptando otras medidas que permitan aumentar el comercio exterior de productos agropecuarios y ampliar los mercados a todos los países que se interesen en comprarlos, sin excepciones de ninguna especie.

La política crediticia

En el pasado, cuando todavía era posible obtener créditos agrícolas de las instituciones públicas en condiciones favorables y con un bajo interés, este fue otorgado en su gran mayoría a los grandes propietarios. Los pequeños y medianos agricultores quedaron en su mayor parte al margen de este beneficio.

El crédito otorgado a los latifundistas se utilizó muchas veces en actividades totalmente ajenas a la producción agropecuaria, como consumos suntuarios, especulaciones o en viajes al exterior.

En 1963, por ejemplo, se otorgó un volumen de crédito agrícola por un monto total de 348 millones de escudos lo que representó el 35% de todo el crédito otorgado en el país. Más de la mitad de esta elevada suma fue a parar a manos de sólo el 2% de los agricultores del país.

Otro hecho que ha entorpecido la política crediticia se ha derivado de la multiplicidad de organismos públicos y privados que actúan en este campo, lo que se ha prestado para muchas irregularidades y para un tráfico de influencias.

El Gobierno Popular pondrá orden en el crédito agrícola. Para ello concentrará en el Banco del Estado el otorgamiento de los créditos, con el único propósito de estimular la producción agropecuaria. Se restablecerán los créditos a largo y mediano plazo y se bajarán los intereses a una tasa no superior al 6% anual. Su descentralización asegurará, por otra parte, la atención oportuna de las necesidades regionales.

Con estos cambios, los pequeños y medianos agricultores obtendrán los créditos necesarios para tecnificar sus explotaciones y elevar su productividad, ya sea que actúen aisladamente o a través de cooperativas. En otras palabras se democratizará el crédito.

Los abastecimientos para la agricultura

Para que la producción agropecuaria se realice de manera eficiente precisa contar con un abastecimiento adecuado de fertilizantes, desinfectantes, equipos y maquinarias, herramientas y semillas. Estos elementos influyen en los costos de producción. La mayoría deben ser importados y se debe pagar por ellos elevados derechos de aduana en algunos casos. Además, los grandes consorcios importadores obtienen enormes utilidades, lo que encarece el precio de estos elementos vitales para la agricultura.

La racionalización de los mecanismos de importación y la creación de una red de proveedores estatales de maquinarias, implementos fertilizantes y semillas, contribuirá a un mejor y más barato abastecimiento de los elementos de trabajo que precisa la actividad agropecuaria, para aumentar sus rendimientos.

Otras medidas económicas

Junto a las políticas de precios, comercialización, créditos y abastecimiento de elementos necesarios para la producción agrícola, el Gobierno Popular realizará un completo y ambicioso programa de asistencia técnica y de investigaciones tecnológicas que permitirá aplicar en nuestro país los últimos adelantos de la producción agropecuaria. Numerosos técnicos del Movimiento Popular están elaborando en OCEPLAN, que es la Oficina Central de Planificación, los programas concretos para mejorar las técnicas de trabajo en el campo. De acuerdo a nuestro concepto de planificación popular, estos programas serán discutidos ampliamente con los sectores interesados, con lo que se aprovechará el conocimiento y la experiencia de nuestros agricultores y campesinos.

La política social y cultural

La reforma agraria del Gobierno Popular constituye un ataque frontal en contra de toda forma de atraso en el campo, como ya se ha dicho, está dirigida a liquidar el poder político y económico de la clase latifundista, a elevar rápidamente las fuerzas productivas en el campo y a eliminar todas las formas de servidumbre.

El Gobierno Popular hará respetar los derechos de los campesinos. Se terminará con la apropiación indebida de las asignaciones familiares. Se estimulará la sindicalización campesina. Se establecerá un salario mínimo justo y éste deberá ser cancelado en su totalidad en dinero efectivo, sin que por ello los campesinos pierdan las "regalías" que reciben en la actualidad.

La vivienda rural ocupará un sitio destacado dentro de los programas gubernamentales, al igual que la atención médica, la que se extenderá a todo el grupo familiar. Junto con eliminar el analfabetismo la educación rural se orientará hacia el perfeccionamiento del trabajo agropecuario, que todavía se desarrolla en forma rutinaria, con el consiguiente bajo rendimiento. Se crearán escue-

las granjas para que los hijos de los campesinos puedan seguir perfeccionándose y llegar a la Universidad.

En tales condiciones será posible ejecutar programas de mejoramiento del hogar campesino, de desarrollo de la comunidad y de intensificación de la cooperación social.

El Gobierno Popular, respetuoso de todas las expresiones nacionales, protegerá en forma especial el desarrollo cultural, social y económico de las comunidades indígenas del sur y de las campesinas, radicadas principalmente en la Zona Norte.

Para tales efectos, además de darles toda la ayuda necesaria para el pleno desenvolvimiento de sus actividades, se procederá a devolverles las tierras usurpadas por los latifundistas y trabajadas, desde antiguo, por dichas comunidades, mediante tradiciones seculares de cooperación, legalizando al mismo tiempo sus derechos de dominio sobre el suelo, las aguas, veranadas, montes, etc.

Algunas políticas especiales

Después de haber dado a conocer los lineamientos básicos de la acción económica y social que el Gobierno Popular llevará a cabo en el sector agropecuario, creo importante agregar algunas consideraciones adicionales sobre los más importantes rubros que constituyen la producción de dicho sector.

Nuestros técnicos están dispuestos a discutir, sin ninguna clase de reservas, con los productores de los diversos sectores que abordaremos a continuación, como también con los restantes, que por falta de tiempo no alcanzamos a tocar.

Producción ganadera

En los últimos 50 años no ha existido una política ganadera definida. Los resultados de ello han sido: un lento crecimiento de la producción, inferior al 1% anual, un alto precio del producto y la necesidad de importar 20 millones de dólares al año en carne.

Se ha castigado alternativamente a la carne o a la leche con precios de liquidación, lo que ha inducido a los productores a mantenerse permanentemente a la defensiva, saltando de una producción a otra de acuerdo a los precios del momento. Se ha originado de esta manera un desperdicio inútil de recursos, que ha sido extraordinariamente lesivo para los consumidores y productores del país. Ello ha significado que periódicamente, y en los momentos en que el precio de la leche es

bajo en relación al de la carne, se envíen al matadero cantidades considerables de vacas, destruyendo así, las bases de producción de nuestra ganadería, o que se faene en los mataderos la mayor parte de los terneros de las lecherías, cuando el precio relativo de la leche es superior al de la carne. De esta manera se elimina la posibilidad de aumentar la producción de carne para el futuro.

No es necesario citar los múltiples informes de técnicos que señalan la existencia de grandes superficies de suelos aptos para el cultivo de forrajeras, que en la actualidad se encuentran cubiertos de pastos naturales y de malezas de muy escaso valor alimenticio para el ganado. No es necesario, tampoco, citar a esos técnicos cuando describen el pésimo tratamiento a que se somete aún a las escasas superficies de pastos mejorados; cómo se pierden por falta de conservación los considerables excesos forrajeros de primavera, lo que provoca a su vez la correspondiente hambruna invernal de los animales; cómo desaparecen enormes cantidades de ganado, víctimas de enfermedades fácilmente controlables; cómo se reduce en invierno el peso del ganado que ha podido aumentar en primavera y en verano. Más aún, se ha dejado que el mayor gasto del consumo recaiga sobre la carne de vacuno, en circunstancias de que enormes superficies del país muestran una clara posibilidad para la producción de ganado lanar. Asimismo, se ha abandonado a su suerte a uno de los recursos más interesantes y rápidos para obtener proteínas animales como es la producción de carne de ave y huevos, ambas muy adecuadas para el pequeño campesino, al igual que la carne de cerdo que en muchos países tiene un gran desarrollo.

Chile produce sólo 42 Kgs. de carne por cada vacuno de existencia mientras que esta cifra es, generalmente, superior a los 60 Kgs. en los países que emplean métodos más racionales en su explotación ganadera. Ello demuestra una baja eficiencia de producción y un encarecimiento inútil de la carne para la mayoría de los chilenos, al mismo tiempo que los pocos que pueden consumirla deben contentarse con un producto de baja calidad.

Chile necesita de importantes aplicaciones de abonos fosfatados para elevar su producción forrajera. Estos abonos deben importarse, lo cual ha sido aprovechado por numerosas organizaciones comerciales para expender el producto a precios tales que ha limitado fuertemente su uso por parte de los agricultores.

Todo este cuadro se ve agravado por la forma en que está organizado el comercio del ganado, en virtud del cual, para que el animal llegue al matadero, debe haber cambiado de mano tres, cuatro o cinco veces, lo que significa la intervención de varios intermediarios, especialmente ferias, que giran con capitales cuantiosos y que en cada etapa provocan recargos en los precios. Todos los agricultores saben que del precio final que pagan los consumidores por la carne, sólo la tercera parte o menos, queda en manos del productor; los dos tercios restantes pasan a beneficiar a los intermediarios.

A ello debe agregarse el hecho de que el Estado ha eludido la construcción de una red de mataderos frigoríficos que eviten las cuantiosas pérdidas actuales y la elevación de los precios de la carne que se origina con el transporte desde los centros de producción a los de consumo.

El Gobierno Popular ve, sin embargo, con optimismo el futuro de nuestra ganadería y tiene la seguridad de cambiar el cuadro sombrío de esta actividad nuestra en el presente. El Gobierno Popular aplicará una política ganadera definida y racional que permita que los productores puedan organizar su trabajo a largo plazo, llevándolos paulatinamente a la especialización en la producción de carne o leche, de cerdos o aves o de ovejunos. Se estimulará así una mayor eficiencia que traerá como consecuencia una baja en los costos de producción. Esta política será complementada con un sistema de créditos adecuados y con una asistencia técnica bien organizada, que contemple la realización de campañas sanitarias regionales y la educación técnica de los productores. Será, asimismo, objeto fundamental del Gobierno Popular la corrección de los numerosos y costosos defectos de la comercialización del ganado y sus productos. También se fortalecerá el desarrollo de las cooperativas de productores, a las que se dotará de los fondos necesarios para que puedan reemplazar con eficiencia a los intermediarios, tanto en lo que se refiere a la venta de productos como a la adquisición de elementos de trabajo.

Otro de los objetivos del Gobierno Popular será el establecimiento de nuevas plantas de azúcar de betarraga, no sólo con el fin de satisfacer las necesidades de azúcar del país, sino que también con el propósito de elevar la productividad ganadera mediante el uso de los subproductos de la remolacha.

El Gobierno Popular ejecutará un programa

de mataderos zonales y de mataderos frigoríficos, de los cuales tanto se ha hablado sin que lleguen nunca a materializarse. Ellos constituirán la base de la organización definitiva del comercio de ganado y carne y servirán tanto a los intereses de los productores como de los consumidores, de tal manera que los primeros reciban un mayor ingreso por su trabajo y los segundos un producto más barato y de mejor calidad para su consumo.

Junto con eliminar los intermediarios que encarecen la carne, pasarán a manos de las cooperativas todas las plantas lecheras que están en manos de particulares. Con ello se conseguirá eliminar los conflictos que permanentemente existen entre estas plantas lecheras privadas y los productores de leche y, al mismo tiempo, se podrá otorgar una asistencia técnica directa desde dichas plantas con el objeto de elevar la eficiencia y bajar los costos de producción en las explotaciones lecheras.

El Gobierno Popular tiene como objetivo fundamental que una de sus primeras medidas sea asegurar que todos los niños de Chile consuman la cantidad de leche recomendada para su crecimiento y su desarrollo lo que creará una demanda adicional que estimulará al crecimiento de la producción lechera.

Por último, se dará preferencia especial al financiamiento de las cooperativas de producción y ganaderas, con el objeto de capacitarlas para que asuman el papel de abastecimiento de consumos para la población.

Todas estas medidas y otras que no es necesario señalar en esta oportunidad, harán posible que se resuelva en forma definitiva el porvenir de la ganadería, lo que a su vez, traerá como consecuencia un adecuado abastecimiento de los alimentos nobles; la carne, la leche y los huevos.

Fruticultura

Así como la zona sur del país tiene condiciones inigualables para la producción ganadera, toda la zona central de Chile e inclusive parte de la zona norte y sur, tienen condiciones excepcionales para la producción frutícola. La fruta no sólo constituye un elemento básico en la nutrición de nuestro pueblo sino que además es potencialmente uno de los productos que puede llegar en gran escala a todos los mercados del mundo, incrementando con ello nuestro ingreso en divisas.

Una hectárea plantada con frutales, pro-

duce varias veces más que si se la dedica a trigo, y da trabajo a un número muy superior de obreros que el cultivo de dicho cereal, creando también industrias derivadas como la conservería, la producción de jugos, la producción de frutas deshidratadas, las instalaciones frigoríficas, los embalajes, etc.

En Chile la exportación de frutas representa un ingreso de divisas equivalente a 5 millones de dólares al año, siendo ésta una cantidad muy pequeña en relación con lo que realmente se podría exportar a los mercados mundiales.

Para dar una idea de la capacidad de expansión de este sector agrícola, podemos destacar que California, que tiene una superficie equivalente a la región frutícola de Chile, produce 26 veces más la cantidad de duraznos que Chile, 24 veces la de naranjas, 12 veces la de uva, 117 veces la de almendras, 48 veces la de damascos y 13 veces la de ciruelas. Se calcula que para la cosecha de 1965, la capacidad frigorífica del país será apenas de poco más de 2 millones de cajones de fruta, en circunstancias que se necesitarían instalaciones que puedan refrigerar 4 millones 300 mil cajones. ¡Cuánto desperdicio de este noble producto!

Llegar a los mercados internacionales significa romper el monopolio naviero de Grace y Cía. y de la Sudamericana de Vapores, controlada por Grace, que cobran más por el transporte de la fruta a Nueva York que las compañías escandinavas y alemanas por el transporte a Europa.

Las medidas generales de beneficio a la agricultura, la estabilización del comercio exterior y de la importación de insumos especialmente, beneficiarán directamente a la fruticultura, permitiendo bajar los costos directos de producción y standarizar la fruta de exportación para poder competir en mejores condiciones en los mercados internacionales. La presentación de nuestra fruta —no la calidad— es deficiente y ello porque los materiales nacionales que se emplean en su envase (papel, cartón, etiqueta y cajones) son malos y muy caros.

La standarización gradual de la comercialización al por mayor de los productos agropecuarios permitirá al Gobierno Popular mejorar los medios de transporte y sobre todo, la refrigeración. Se establecerá rápidamente una red de mercados con frigoríficos de almacenamiento en las zonas productoras.

Junto con todas las medidas enunciadas se realizará una amplia difusión sobre las téc-

nicas modernas de poda, desinfección y fertilizantes minerales, especialmente fósforo. De esta manera se obtendrán mejores rendimientos y se elevará la calidad de nuestros frutos.

En el caso de los tractores se produce el absurdo de que los neumáticos tienen un precio exorbitante de mil dólares, equivalente a la mitad del costo del tractor.

La producción de trigo

El precio del trigo se fija prácticamente durante la cosecha y éste no está de acuerdo con el cálculo de costos que realizan los técnicos del Ministerio de Agricultura, estableciéndose, además, un sistema diferencial de precios de acuerdo con el flete que debe pagarse por su transporte, lo que perjudica a la zona de mayor producción.

Si a ello se agrega que los compromisos financieros obligan especialmente a los pequeños y medianos agricultores a liquidar rápidamente la cosecha lo que crea las condiciones para que puedan comprársela a un precio inferior al fijado, veremos que la política triguera tiende a frenar la producción precisamente en las zonas que son las mayores productoras, gravando de esta manera el déficit de este alimento obligado para el pueblo.

ECA sólo tiene capacidad para adquirir el 10% de la producción nacional, de tal modo que la fijación de precios es teórica ya que no existe una influencia significativa en el mercado y es posible burlar lo que el Gobierno dispone al respecto.

Por este motivo, el Gobierno Popular creará el poder comprador a través de la ECA, poder comprador capaz de adquirir toda la producción nacional de trigo. Para ello será necesario que pasen a manos de ECA los principales molinos de Chile. ECA irá estableciendo gradualmente instalaciones modernas de molinería en la zona sur, donde se obtiene la proporción mayor de este producto, evitando de esta manera los fletes falsos de transportes del trigo hacia la zona central y de los subproductos de la molinería, para que sirvan de alimento para el ganado. El trigo se molerá en las regiones en que se produzca y sólo la harina será transportada a los centros consumidores. ECA se preocupará además, de la construcción de silos y bodegas, de secadores y seleccionadoras de grano, con el objeto de contribuir a dar un servicio más adecuado a los productores de este cereal.

La producción de hortalizas

Chile tiene condiciones naturales especiales para producir hortalizas y verduras de la mejor calidad, lo que unido a la mano de obra especializada de sus chacareros posibilita la producción de excelentes artículos.

Cabría preguntarse entonces: —¿Por qué es tan grande el problema del abastecimiento?— —¿Por qué se produce la escasez?— ¿Por qué existen precios tan elevados para las verduras a través de todo el año y más elevados aún a medida que el consumidor se aleja de la capital?

La mayor parte de la producción hortícola de Chile se obtiene en los alrededores de Santiago, en las provincias de Valparaíso y Aconcagua y en menor proporción en Talca. Casi la totalidad de estos productos llega a los remates de la Vega Central desde donde son enviados al resto del país. Este hecho constituye en sí mismo una aberración, especialmente en Chile, donde el costo del transporte es muy elevado para los productos perecibles y donde cada región es capaz de abastecerse con verduras de alta calidad.

La mayoría de los productores de hortalizas está constituida por pequeños arrendatarios y por medieros que además de pagar altos precios por la tierra que trabajan, deben pagar comisiones elevadas a los consignatarios que reciben sus productos en la Vega, viéndose perjudicados por la forma que se comercializan sus productos.

—¿Cuántas decenas de miles de toneladas de tomates se pierden en el Norte Chico y en la zona central debido a que no existen fábricas que transforman este producto de tan alto valor?

—¿Cuántos miles y miles de lechugas o repollos permanecen en el campo sin ser cosechadas, porque no existen instalaciones frigoríficas adecuadas para conservarlas?

Para terminar con este absurdo sistema de producción y de comercialización de las hortalizas, que perjudica tanto al productor como al consumidor, el Gobierno Popular creará cinturones agrícolas alrededor de las principales ciudades de acuerdo a los requerimientos de éstas, mediante la entrega de

tierras a los chacareros y hortaliceros que las explotarán con las técnicas más modernas, organizados en cooperativas que tendrán todo el apoyo y el estímulo del Gobierno.

Se calcula que de esta manera se logrará elevar en forma rápida en un 50% la disponibilidad de estos productos. Se obtendrá asimismo, una apreciable baja en los costos de producción y se logrará la meta fundamental del Gobierno Popular que es proporcionar alimentos baratos y abundantes para todo el pueblo.

ECA cumplirá un papel decisivo en el abastecimiento de los productos de chacarería mediante la utilización de camiones y de vapores que los distribuirán a lo largo de todo el país, especialmente en los extremos norte y austral.

Asimismo, el Gobierno Popular fomentará el establecimiento de industrias que transformen los productos agropecuarios creando en todo el país una red de industrias para elaborar, transformar y almacenar los productos agrícolas.

Estas son líneas generales del programa agrícola del Gobierno Popular. Los detalles mismos del programa y los otros sectores de la producción agrícola están siendo estudiados a fondo por la Oficina Central de Planificación, en la que colaboran los mejores especialistas y técnicos de avanzada de nuestra candidatura.

Lo dicho hasta aquí tiene la virtud de expresar derechamente el pensamiento popular del futuro Gobierno Popular, pudiéndose marcar perfectamente las diferencias programáticas que nos separan de otras candidaturas.

En todo caso, nuestra decisión está tomada y con el apoyo firme y decidido de todo el pueblo, en especial de su clase obrera y del campesinado, efectuaremos sin claudicaciones ni renuncias las reformas que reiteradamente hemos planteado al país, en la seguridad de que con ellas estamos dando un golpe definitivo a la injusticia, la miseria y la explotación y que sólo con esas medidas Chile podrá salir adelante, dando a sus hijos el papel de dignidad que les corresponde en la vida nacional, con independencia, con progreso, con bienestar y con cultura para todos los chilenos.